



NUE 283-A-2019 (RG)

Bonilla Guevara contra Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte.

1. Descripción del caso

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Briseida Xiomara Bonilla Guevara**, en adelante la apelante, en contra de la resolución emitida por el oficial de información del **Tribunal Supremo Electoral (TSE)**. La información solicitada por la apelante consistente en:

1) *¿Cuál es el número de acta y fecha en la que se discutió la resolución PSLPP-01-2019 de procedimientos sancionatorio/improcedencia?*

2) *¿Las discusiones del cuerpo electoral, en las que se toman decisiones para este tipo de resoluciones son gravadas en sistemas audiovisuales o de audio?*

3) *¿En caso de ser gravadas se puede entregar copia de la discusión sobre la discusión antes relacionada?*

4) *¿Quiénes participan en la emisión de la resolución PSLPP-01-2019?*

5) *¿A quienes pertenecen las firmas que calzan en los laterales y al final de la resolución PSLPP-01-2019?*

6) *¿Cuáles son los nombres de esas personas y el cargo que ostentan cada uno de ellos?*

7) *¿Cómo fueron electas estas personas para el cargo que están desempeñando?*

8) *¿Por qué partido político fueron propuestas las personas que firman esta resolución?*

En fecha 13 de noviembre de 2019, el oficial de información del TSE resolvió: "no es posible proporcionar a la peticionaria la información solicitada por ser información reservada

Handwritten signature and initials.



de conformidad al art. 26 inciso 2° de la Ley de Partidos Políticos, por encontrarse en trámite el procedimiento sancionador, como lo informa la Secretaría General de este Tribunal”.

Este Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada **Silvia Cristina Sánchez Pérez** para dar el trámite de ley al presente caso, de conformidad a lo establecido en el artículo 87 de la LAIP; sin embargo, ante el nombramiento del Comisionado Propietario del sector de Universidades, el caso ha sido reasignado al Comisionado **Ricardo José Gómez Guerrero**, y en tal sentido, el mismo ha presentado proyecto de resolución para el presente procedimiento. Asimismo, en pleno cumplimiento al derecho de defensa y audiencia de las partes, en el auto de admisión del presente recurso, se solicitó la presentación al TSE del informe de justificación del acto impugnado conforme al Art. 88 de la LAIP.

El ente obligado rindió el informe solicitado, por medio de la Magistrada Presidenta del **Tribunal Supremo Electoral (TSE)**, **Dora Esmeralda Martínez de Barahona**, y en lo medular se estableció que no se puede dar acceso a la información solicitada, pues según lo expuesto por el oficial de información, la misma se encuentra reservada en virtud de lo dispuesto en la Ley de Partidos Políticos (LPP), adicionalmente, se trata de información de carácter jurisdiccional, según lo expresado en la Inconstitucionalidad 7-2006 y el Amparo 71-2015, haciendo énfasis en que *“la información relativa a procesos jurisdiccionales se obtenga de acuerdo a las normas que rigen a estos trámites y no con las normas estatuidas en la LAIP”*, alegando que bajo estas últimas se debe solicitar y facilitar únicamente información de carácter administrativo de los juzgados y tribunales y no a la información jurisdiccional.

Por último, **Martínez de Barahona** alega que lo solicitado por la ciudadana **Briseida Xiomara Bonilla Guevara**, no corresponde al ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), sino a la aplicación directa del derecho de petición y respuesta expresado en el art. 18 de la Constitución de la República, en tanto no se solicita *“el suministro de información pública tangible”*, en cuanto lo solicitado corresponde a *“por escrito, generar una respuesta razonada y legal a los planteamientos de quien ejerce su derecho”*

Posteriormente, se realizó audiencia oral correspondiente, con la comparecencia de ambas partes, manifestando **Bonilla Guevara** en la fase de alegatos que no fue pertinente la resolución del oficial de información del TSE, al alegar que es información reservada de conformidad al art. 26 de la Ley de Partidos Políticos, por encontrarse en trámite el proceso sancionador. Considera que su solicitud son interrogantes de carácter público oficioso que se podían brindar incluso sin tener acceso al expediente por haberse anexado copia de la

resolución sobre la que recae la solicitud de información. Que las actas del pleno del TSE son información pública oficiosa, de conformidad a lo establecido en el art. 15 de la LAIP.

Asimismo, afirmó que no se solicita la elaboración de un documento ad hoc, sino más bien es una solicitud puntual de información. Que el medio de solicitud de información no podía ser de pregunta y respuesta porque no se le informó así por el oficial de información del TSE. Que considera que con la respuesta otorgada por el citado funcionario público, existe vulneración a los principios de disponibilidad y prontitud.

Que su petición en concreto consiste en que se le brinde la información solicitada al oficial de información del TSE, consistiendo en ocho peticiones en concreto, que son información de carácter oficioso. Que no se hace petición alguna sobre el procedimiento en sí.

Por su parte, el Licenciado **Oscar Antonio Rivera Morales**, en representación del TSE, en lo medular manifestó que el hecho en controversia es si se debe o no entregar la información requerida, siendo la génesis del procedimiento la denegación de dicha información, siendo tres los argumentos bajo los cuales se ha realizado tal actuación: 1. por considerar que es información reservada; 2. Por considerar que es información jurisdiccional, a la cual se puede acceder según lo establecido en la ley; y, 3. que la información es una petición ad hoc, en el sentido que se ha presentado una lista de preguntas a las cuales se requiere una serie de respuestas específicas.

En sus alegatos finales el citado profesional manifestó que su intervención parte del contenido del art. 3 de la Ley de Partidos Políticos (LPP), en el cual se señala la competencia al TSE, como máxima autoridad para el cumplimiento de dicha normativa. Asimismo, el art. 26 de la LPP, establece que cuando hay un proceso en contra de un partido político el mismo es reservado. Que consta en la respuesta de este caso, dada por el Secretario General del TSE, la naturaleza reservada de los procesos en los cuales los partidos políticos son parte. Ante tal situación, en este momento se investiga cómo la apelante tiene esta información, agregada al procedimiento, lo cual considera que es prueba ilícita en violación del art. 26 de la LPP, sin establecerse como la ciudadana ha obtenido esa resolución, que si bien puede tener carácter de información pública, ello hasta que se realiza la versión pública, contrario a lo presentado en este procedimiento. Que con certeza asegura que la información oficiosa publicada en la página web está en versión pública, lo cual es suficiente para declarar sin lugar la petición realizada.

Que la segunda razón, está relacionada en el informe de defensa presentado en este procedimiento, consistente en que la función del TSE se divide en función administrativa y



función jurisdiccional, y tratar de acceder a cualquier información por medio de la función administrativa es un equívoco, que siempre se ha otorgado la información relacionada a su actividad administrativa, pero insiste que no se puede pedir cualquier información por medio de es función administrativa, que la misma Sala de lo constitucional ha reconocido la función jurisdiccional del TSE, lo cual es una discusión superada.

Que la forma para acceder a la información jurisdiccional es por medio de lo establecido en el art. 9 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), que es revisando el expediente y justificando el interés legítimo para acceder al mismo, que considera que lo que ha existido en este procedimiento es una especie de fraude a tal principio de publicidad que regula el CPCM. Que en estricto sentido la información requerida no es la que regula el art. 2 de la LAIP, por eso el ente obligado considera que lo que se está solicitando debe realizarse por la vía de petición y respuesta.

Que la información solicitada está relacionada con su expediente jurisdiccional. Que el portal de transparencia del TSE se encuentra actualizado hasta finales del año recién pasado, y toda la documentación se encuentra en versión pública, lo cual no ha sucedido en el documento que ha presentado la ciudadana apelante. Que considerando que la información requerida no ha sido generada por el TSE, lo que se está solicitando en este caso, es la elaboración de un documento ad hoc, consistente en contestar cada una de las preguntas elaboradas por la peticionante.

Que la solicitud puntual es la ratificación de la resolución emitida por el oficial de información del TSE, en el sentido de denegar la solicitud de información realizada, por los motivos expresados previamente.

Análisis del caso

Este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación es pronunciarse sobre la entrega de la información requerida, valorando la naturaleza de la misma y los principios rectores de máxima publicidad, disponibilidad, integridad y rendición de cuentas. En este contexto, el examen del caso seguirá el *iter* lógico siguiente: (I) Elementos para diferenciar la información pública de la información de carácter jurisdiccional, la información que corresponde al Derecho de Petición y Respuesta. (II) Naturaleza de la información solicitada en el caso de mérito, ordenando la entrega o no de la información requerida.

(I) A. El Art. 2 de la LAIP, establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados, de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla. En ese orden de ideas, de conformidad con el Art. 6 letra “c” de la LAIP, la información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico.

Los entes obligados, de conformidad a la LAIP (art. 7), son los órganos del Estado, su dependencia, las instituciones autónomas, las municipalidades y cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general. De ahí que el derecho de acceso a la información pública tiene por objeto la transparencia y la rendición de cuentas continua de los actos de gobierno; es decir, que la población se entere, sepa de qué se trata, tome noticia de los antecedentes, fundamentos y de todo lo atinente a una decisión de interés público.

Con estos puntos, podemos establecer que no se puede descartar una solicitud de información pública por el formato de preguntas en que se realice; siempre y cuando, exista un soporte o registro del requerimiento de información. Al respecto la Sala de lo Constitucional dentro de la inconstitucionalidad con referencia 136-2014/ 141-2014, en resolución de fecha 15 de febrero de 2017, ha establecido que: “...*toda persona tiene el derecho a conocer la manera en los gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, y de ello deriva el derecho de acceso a la información pública. Además, la información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno, sino a la titularidad que se tiene sobre este derecho fundamental. Los servidores públicos disponen de la información precisamente en su calidad de delegados del pueblo o representantes de los ciudadanos...*”.

Otra característica del DAIP, es el doble sentido que ostenta, por una parte el derecho que lleva por sí mismo y por otra parte, el que sirve de instrumento para el ejercicio de otros derechos, como el de la libertad de expresión y en algunos instrumentos internacionales



incluyen además la libertad de pensamiento, son precisamente estos derechos los que comprenden la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole¹

Este mismo fundamento, permite establecer que el DAIP es un derecho humano de amplio espectro, reiteramos que ejerce una función de control y transparencia respecto de la gestión gubernamental, con lo cual se fortalece la participación ciudadana en un Estado de derecho; sin embargo, el mismo se ve condicionado a aquellas actuaciones relativas a información existente o que haya obligación legal de poseerla, que se encuentre en poder del ente obligado por el ejercicio de su funciones, y esté contenido en alguna forma de registro tangible, pues en caso contrario podría clasificarse como otro tipo de información.

B. Ahora bien, se puede entender como información jurisdiccional, aquella que se encuentre bajo el amparo del art. 9 del Código Procesal Civil y Mercantil, que literalmente establece:

“ Las audiencias de todos los procesos previstos en este Código serán públicas, salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, disponga lo contrario por razones de seguridad nacional, de moral o de orden público, o de protección de la privacidad de alguna de las partes.

La restricción de la publicidad de las audiencias deberá acordarse en resolución debidamente motivada, en la que se precisen de manera expresa y clara las razones de dicha restricción, así como la determinación de quienes, además de las partes, sus apoderados o representantes, podrán estar presentes en las mismas.

Las partes, sus apoderados, representantes, los abogados y cualquiera otra persona que alegue algún interés jurídicamente protegido, tendrán acceso al expediente judicial.”.

En tal sentido, el acceso al contenido de procesos jurisdiccionales son restringidos exclusivamente a las partes intervinientes y a aquellas personas que tengan un interés legítimo en el mismo. Lo cual se traduce a que el acceso a la información generada, obtenida y en poder de esos órganos de Estado, durante la tramitación de dichos procesos, no es información pública, sino información jurisdiccional.

¹ Instituto de Transparencia e información pública de Jalisco (ITEI). Consideraciones sobre las diferencias entre el derecho a la información pública y el derecho de petición. 31 de marzo de 2009. Guadalajara, Jalisco, México. Pág.10.

En este punto es válido, hacer el análisis de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, dentro del expediente con referencia 7-2006, en la resolución emitida el veinte de agosto de dos mil catorce, en la cual denominó *información jurisdiccional*, todo aquel dato que constate la existencia o realización de un acto que tiene efectos o consecuencias directas o indirectas en un proceso o procedimiento tramitado ante autoridades que ejercen jurisdicción.

Siendo una característica de este tipo de información, el aporte que realiza dentro de la tramitación de un proceso o procedimiento, en particular en la fase deliberativa del mismo, independientemente del soporte en el que se encuentre; en otras palabras, todo el acervo documental o de información que forme parte de ese trámite, puede ser atendible únicamente legitimando la calidad e interés que se ostenta, quedando sujeto su acceso a la decisión del tribunal decisor.

Otro punto importante a tomar en cuenta, respecto a la información jurisdiccional, es que no necesariamente la producción u obtención de este tipo de información no es de los tribunales de justicia, sino también de órganos administrativos que ostentan competencia jurisdiccional, considerando las atribuciones otorgadas por la norma constitucional.

Al respecto la Sala de lo Constitucional², ha reconocido que “La jurisprudencia de esta sala ha caracterizado la jurisdicción diciendo que “... es un concepto constitucional vinculado a jueces independientes, inamovibles y sometidos únicamente al derecho positivo. integración unitaria de los funcionarios que la ejercen dentro del Órgano Judicial” (así se entiende, por ejemplo, en la sentencia de 20-VII-1999, Inc. 5-99).”[...]“Sin embargo, hay excepciones reconocidas por la propia Constitución, que por diversas razones separa del Órgano Judicial a ciertos entes públicos con funciones propiamente jurisdiccionales, es decir, de interpretación y aplicación del derecho para la solución de conflictos sociales, con carácter irrevocable, sin perjuicio del sistema de recursos (sentencia de 5-XII-2006, Inc. 19-2006). En la sentencia de 13-VI-2014, Inc. 18-2014, se incluyó dentro de esas excepciones al TSE. Y precisamente, en relación con este punto, en la resolución de 19-IV-2017, Inc. 27-2015, este

² Recuperado el 25 de septiembre de:

<https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=1&data=DocumentosBodega%2FD%2F1%2F2010-2019%2F2018%2F07%2FCDD8.PDF&number=843224&fecha=10/07/2018&numero=64-2015AC&cesta=0&singlePage=false%27>



tribunal sostuvo que "[r]especto a la competencia constitucional del TSE, esta sala ha reconocido que ella: (i) incluye *funciones jurisdiccionales*, es decir, de interpretación y aplicación del derecho para la solución de conflictos sociales, con carácter irrevocable; (ii) se sujeta al principio de unidad jurisdiccional, como un modo específico organización y funcionamiento del órgano decisor: independencia, imparcialidad, responsabilidad y predeterminación legal y no discriminatoria de sus funcionarios; y (iii) tiene una materia o especialidad electoral que se relaciona directamente con la protección o garantía de principios y derechos fundamentales imprescindibles para el sistema democrático salvadoreño". (negritas suplidas)

Lo anterior, corrobora que el TSE, no obstante ser un órgano de naturaleza Administrativa, ejerce una doble función, de acuerdo a las competencias otorgadas por la Constitución, lo cual debe tomarse en cuenta al momento de tramitar una solicitud de información, a efecto de valorar el tipo de petición que se realiza.

C. Respecto al derecho de petición y respuesta, podemos afirmar que su fundamento normativo se encuentra en el Art. 18 de la Constitución de la República, de conformidad con el cual, toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas, a que se le resuelvan y a que se le haga saber lo resuelto.

Este derecho también se encuentra contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos³: "*toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter*". Si bien es cierto, el referido Tratado se refiere a las garantías judiciales, como derivación del derecho de petición, la disposición citada también es aplicable a las peticiones realizadas en sede administrativa.

³ Firmada el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por la República de El Salvador el 20 de junio de 1978.
Fuente: <https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos3.htm>

En virtud de lo cual este Instituto, considera oportuno reiterar lo establecido en jurisprudencia precedente⁴ en la cual se afirma que por medio del derecho de petición, se pueden exigir explicaciones sobre el que hacer de la administración pública, es decir, que su finalidad no es propiamente la de resolver sobre el suministro de información pública tangible y con soporte, **sino dar una respuesta razonada dentro del quehacer de la administración.**

Al respecto, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), en el documento "Consideraciones sobre las diferencias entre el derecho a la información pública y el derecho de petición" señaló que la finalidad del derecho de petición y respuesta, es el mantener un vínculo de comunicación entre el gobernante y el gobernado, con el objeto de que éste último se haga escuchar por el primero sobre cualesquiera que sean sus inquietudes y recibir atención puntual a sus problemáticas.

D. De lo anterior, se advierte que la LAIP otorga atribuciones a este Instituto exclusivamente para conocer lo referente a la promoción, garantía y aplicación del Derecho de Acceso a la Información Pública, no existiendo atribución legal para ejercer un control o dirimir conflictos relacionados a información jurisdiccional; y tampoco, respecto al derecho de petición y respuesta.

Bajo este contexto es procedente verificar el requerimiento de información realizado por la ciudadana **Briseida Xiomara Bonilla Guevara**, en su solicitud de información, a fin de determinar si su contenido responde al Derecho de Acceso a la Información, o si por el contrario, la apelante debe utilizar un medio distinto para su obtención.

(II) Entonces, es procedente verificar la naturaleza de la información solicitada en el caso de mérito para lo cual se considera pertinente hacer un análisis de los cuestionamientos realizados por la ciudadana Bonilla Guevara, a fin de determinar la pertinencia o no de la misma, para lo cual se ha elaborado un cuadro con las características de la información requerida:

⁴ Véase resolución definitiva, emitidas dentro del expediente NUE 77- A- 2017, de fecha 29 de mayo de 2019; y del expediente NUE 187-A-2019, con fecha 29 de agosto de 2019.



Requerimiento de información	Características:	Tipo de información:
<p>1) ¿Cuál es el número de acta y fecha en la que se discutió la resolución PSLPP-01-2019 de procedimientos sancionatorio/improcedencia?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se refiere únicamente a conocer el número y fecha de un acta, no la discusión o el contenido de la misma. • Las actas del Pleno del TSE, son información pública oficiosa, según lo establecido en el art. 15 b) de la LAIP. • La entrega de la misma no interfiere en la tramitación del objeto de controversia en discusión. 	<p>Información Pública</p>
<p>2) ¿Las discusiones del cuerpo electoral, en las que se toman decisiones para este tipo de resoluciones son gravadas en sistemas audiovisuales o de audio?</p> <p>3) ¿En caso de ser gravadas se puede entregar copia de la discusión sobre la discusión antes relacionada?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El contenido de la información que se pretende extraer de estas interrogantes, son explicaciones sobre el que hacer de la administración pública, en particular de la forma en cómo se toman las decisiones por parte del Colegiado y si las mismas se encuentran disponibles al público. • Su finalidad no es propiamente la de resolver sobre el suministro de información pública tangible y con soporte, sino sobre la práctica en el que se deciden tales decisiones. 	<p>Información correspondiente al derecho de petición y respuesta</p>
<p>4) ¿Quiénes participan en la emisión de la resolución PSLPP-01-2019?</p> <p>5) ¿A quiénes pertenecen las firmas que calzan en los laterales y al final de la resolución PSLPP-01-2019?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El art. 3 de la LPP, reconoce en el TSE la autoridad máxima para hacer cumplir dicha normativa. • La información que se solicita está íntimamente relacionada con la ejecución de atribuciones públicas para las cuales han sido electos los funcionarios del más alto 	<p>Información Pública</p>

<p>6) ¿Cuáles son los nombres de esas personas y el cargo que ostentan cada uno de ellos?</p> <p>7) ¿Cómo fueron electas estas personas para el cargo que están desempeñando?</p> <p>8) ¿Por qué partido político fueron propuestas las personas que firman esta resolución?</p>	<p>nivel del Tribunal Supremo Electoral.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La entrega de esta información no afecta la tramitación del procedimiento PSLPP-01-2019, pues no está relacionado al fondo del mismo, sino a las funciones que realizan los titulares del TSE, en el ejercicio de cargo para el cual han sido nombrados. 	
--	---	--

Por tanto, se puede tener por establecido, que si bien se ha realizado una serie de requerimientos de información por medio del formato de preguntas, al corroborar en qué consiste el fondo de lo solicitado, se pudo advertir que los requerimientos 1 y del 4 al 8, si corresponden a información pública.

Aunado a ello, no obstante dicho formato en el que se realizó la solicitud de información, se puede tener por establecido que el acceso a la misma, tampoco sería por medio del derecho de petición y respuesta, al no corresponder tampoco esa categoría de información, siendo pertinente advertir al ente obligado, que en lo consecuente realice un análisis integral de la normativa aplicable a cada caso, es decir, una interpretación que potencie el ejercicio de derechos ya sea de acceso a la información pública o el de petición y respuesta, haciendo un estudio de cada uno de los requerimientos de información realizados y tomando en cuenta la doble naturaleza del TSE, a efecto de no dilatar de manera innecesaria la tramitación de una solicitud de información.

Por otra parte, debe traerse a colación que si bien existió alguna argumentación por parte del ente obligado de la forma irregular que la ciudadana apelante obtuvo la resolución de improcedente emitida dentro del expediente PSLPP-01-2019, tal circunstancia no afecta el conocimiento de este procedimiento, por dos consideraciones; la primera, consiste en que ya se estableció la incompetencia de este Instituto en dar trámite a procedimientos no relacionados con el DAIP; y, en segundo lugar, la información que se ha clasificado como información pública no tiene vinculación directa con el referido caso.



Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 94, 96 letra d y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

a) Modificar el contenido de la resolución emitida por el oficial de información del **Tribunal Supremo Electoral (TSE)**, en fecha 13 de noviembre de 2019.

c) Ordenar a la autoridad máxima del **Tribunal Supremo Electoral (TSE)**, que por medio de su titular, que dentro del plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, entregue a la ciudadana **Briseida Xiomara Bonilla Guevara**, la información relacionada con estos requerimientos de información:

- 1) ¿Cuál es el número de acta y fecha en la que se discutió la resolución PSLPP-01-2019 de procedimientos sancionatorio/improcedencia?
- 4) ¿Quiénes participan en la emisión de la resolución PSLPP-01-2019?
- 5) ¿A quiénes pertenecen las firmas que calzan en los laterales y al final de la resolución PSLPP-01-2019?
- 6) ¿Cuáles son los nombres de esas personas y el cargo que ostentan cada uno de ellos?
- 7) ¿Cómo fueron electas estas personas para el cargo que están desempeñando?
- 8) ¿Por qué partido político fueron propuestas las personas que firman esta resolución?

d) Ordenar a la autoridad máxima del **Tribunal Supremo Electoral (TSE)**, que por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo indicado anteriormente, remita a este Instituto un informe de cumplimiento en el que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**

e) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.


g) Publíquese esta resolución oportunamente.

Notifíquese. -

PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LA SUSCRIBEN

SD/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



